

Caquetá

Informe preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz

ABRIL DE 2019



Resumen

En Caquetá el Acuerdo de Paz es visto como una oportunidad para la transformación del territorio y la reducción de los índices de violencia, destacando la percepción positiva sobre la construcción del PDET. Sin embargo, los distintos actores coinciden en señalar la fragilidad del proceso de implementación, por la falta de recursos, los rezagos e incumplimientos y la presencia de estructuras disidentes en diferentes zonas del territorio. La reincorporación de los excombatientes está en riesgo por la incertidumbre sobre la terminación de los ETCR y la renta básica, y por la dificultad que existe para el acceso y titulación de tierras para implementar proyectos productivos. Además, menores de edad se encuentran en situación de alta vulnerabilidad por el reclutamiento forzado de los grupos disidentes.

1. Estado de la implementación

a) La renovación territorial (PDET)

La subregión PDET de la Cuenca del Caguán y piedemonte caqueteño comprende los 16 municipios de Caquetá¹ y el municipio de Algeciras en Huila. El PATR de esta subregión fue firmado el 31 de enero de 2019. El PDET es percibido por comunidades y autoridades locales como un proceso participativo en el que se vincularon diferentes sectores y a través del cual se visibilizaron las necesidades estructurales de la región.

Se implementó la ruta étnica para la formulación de los pactos, la cual tuvo algunas dificultades, pero sirvió como una oportunidad de articulación de las comunidades indígenas del departamento. También, se realizaron escenarios de participación de mujeres rurales; sin embargo, no se desarrolló una ruta particular con comunidades afrodescendientes. El desarrollo del programa no se vio afectado por las condiciones de seguridad del departamento, logrando acceder a los diferentes municipios.

Contenido

Estado de la implementación del Acuerdo de Paz

Posiciones de los actores claves en el territorio

Principales dinámicas y trayectorias de la confrontación armada

Principales preocupaciones

La implementación en cifras

¹ Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparariso.

En la región se avanzó en la construcción de las Pequeñas infraestructuras Comunitarias (PIC) las cuales se ejecutaron en 5 municipios. También, se acordaron nuevas obras para una segunda y tercera fase (en los 17 municipios); sin embargo, los recursos para éstas no se han desembolsado.

Justamente, la preocupación principal es la financiación de estas PIC y la implementación de las iniciativas que quedaron consignadas en el PATR, así como la capacidad del personal en territorio para cubrir la amplitud de esta subregión. En este sentido, una de las prioridades para los actores territoriales es que se socialice con las comunidades la ruta a seguir y se continúe con las obras pues éstas han sido percibidas positivamente y han generado procesos de empoderamiento y compromiso hacia el proceso PDET.

Para las comunidades y autoridades locales, los temas prioritarios que quedaron recogidos en este proceso son los de formalización de tierra y dotación de infraestructura educativa y de salud. Ellos esperan generar acciones de incidencia en las propuestas de los candidatos a alcaldías y gobernación para que incorporen y articulen sus planes con lo desarrollado en el marco del PDET.

b) La reincorporación

En el departamento del Caquetá, las percepciones de los actores del territorio evidencian un estado de fragilidad en el proceso de reincorporación por la incertidumbre que genera la terminación de los ETCR y los retrasos en la implementación de los proyectos productivos y la reincorporación económica.

En el departamento se encuentran cerca de 520 excombatientes de manera dispersa en los 16 municipios del Caquetá y alrededor de 200 en Aguabonita, municipio de Montañita, y 80 en Miravalle, municipio de San Vicente del Caguán. Cabe mencionar que estas cifras cambian constantemente dada la movilidad de esta población. Hasta el momento en la zona no se han constituido formalmente Áreas de Reincorporación Grupal.

Los dos Espacios Territoriales se caracterizan por tener un alto grado de organización y coordinación interna que les ha permitido impulsar distintos proyectos productivos. En el caso de Aguabonita, uno de los logros más importantes es la compra de 175 hectáreas de tierra por parte de los excombatientes que comprenden el ETCR y la zona aledaña. En este terreno, con fondos propios y ayuda de la cooperación internacional, están cultivando piña, Sacha Inchi, cítricos, yuca y plátano (para auto consumo). Además, están construyendo una despulpadora de frutas y tienen proyectos de piscicultura, cerdos, gallinas, ebanistería y confección de botas.

Pese a que ya compraron la tierra, su mayor preocupación está asociada a la formalización y titulación del predio, y a la constitución de la Junta de Acción Comunal, algo en lo que han encontrado importantes trabas burocráticas. Además, en este ETCR se encuentra la Escuela de desminado humanitario donde se capacita a los excombatientes.

En Miravalle, un espacio más pequeño, se está adelantando un proyecto de piscicultura, cultivos hidropónicos de tomate, tomate cherry, pimentón y hortalizas que son comercializadas en el mercado de San Vicente del Caguán. También, tienen un proyecto de turismo que ya cuenta con una iniciativa de Rafting y se pretende la construcción de un restaurante bioclimático y unas cabañas para alojar a los turistas. Pese a el adelanto en los proyectos productivos, las preocupaciones de esta población están asociadas a la terminación de los ETCR en agosto, la titulación y compra de tierras para continuar con los proyectos productivos y la terminación de la renta básica y la inserción laboral de los excombatientes. Los proyectos con los que cuentan no permiten darle sostenimiento a todos los desmovilizados que se encuentran en el ETCR. Por último, preocupa la falta de voluntad de la Alcaldía de San Vicente para adelantar y apoyar el proceso de reincorporación.

c) La sustitución de cultivos ilícitos

El PNIS se implementa en 9 municipios, donde se vincularon a 12.951 familias y se erradicaron voluntariamente 4.258 has. El programa ya prestó asistencia técnica a 612 familias en El Doncello, 549 en San José de Fragua y a 882 en San Vicente del Caguán. Se proyecta la inclusión de 5 municipios más para completar los 14 que firmaron acuerdo colectivo. La hoja de ruta del programa se ha ajustado para avanzar en los municipios priorizados, los cuales han tenido un ritmo diferenciado en la implementación del programa.

Los retrasos están relacionados con las condiciones de seguridad de la región que limitaron la verificación de predios por parte de Naciones Unidas, además de alertas de riesgo para funcionarios del programa y de UNODC. En municipios con problemas de seguridad como Cartagena del Chairá y Puerto Rico resultaron un mayor número de familias suspendidas, en gran parte por las limitaciones presentadas en la verificación. Al 7 de abril de 2019, se encontraban suspendidas 1.180 familias por diversas causas.

Las conflictividades alrededor del PNIS han desencadenado protestas sociales desde finales de 2018, principalmente en San José del Fragua. Estas movilizaciones en un principio denunciaron las demoras en los pagos y la asistencia técnica, por lo que se generaron mesas de diálogo para aclarar los cronogramas. Las comunidades han exigido ampliar la cobertura a otros municipios e inscribir más familias, así como no



erradicar forzosamente ni implementar la aspersión con glifosato en la región. A pesar de los cronogramas que hay de pagos y avance en la asistencia técnica, las comunidades manifiestan que esto no es suficiente dadas las necesidades estructurales que persisten.

Actualmente, se conformaron mesas de diálogo para discutir el pliego de peticiones de las comunidades en las que participarán líderes sociales, autoridades locales, delegados de entidades regionales y nacionales. Se prevé una nueva movilización en el marco del paro nacional convocado para el 25 de abril.

d) Garantías de Seguridad

El departamento del Caquetá muestra el deterioro de las condiciones de seguridad por la presencia de estructuras disidentes. Actualmente, en municipios como Cartagena del Chairá, Solano y la zona sur del departamento que limita con el Putumayo, las estructuras disidentes están reactivando los “manuales de conducta” y el control a la movilidad. También, los actores del territorio advierten sobre el incremento del reclutamiento y utilización de menores de edad. Por otro lado, las estructuras disidentes han dirigido sus acciones contra consumidores de drogas y ladrones, por medio de homicidios y desplazamientos, como forma de mostrar control social.

Frente a la situación de líderes sociales, los diferentes actores entrevistados señalan que no hay una presión sistemática sobre los líderes, pero se están presentando amenazas y asesinatos. Según la Base de seguimiento a agresiones a líderes sociales de la FIP, durante el 2018 se presentó un incremento sustancial de homicidios a líderes sociales frente a los años anteriores, donde se registraron 7 homicidios. Los municipios afectados fueron Cartagena del Chairá (2), Curillo (1), Florencia (1), La Montañita (1), San José del Fragua (1) y San Vicente del Caguán (1). Para 2019 se ha registrado un caso en el municipio de Curillo.

En cuanto a la seguridad de los excombatientes, los entrevistados concuerdan en que no hay una amenaza sistemática a esta población. Sin embargo, se han presentado algunas presiones a excombatientes para vincularlos a los grupos disidentes, principalmente explosivistas, durante el 2018. De acuerdo con el seguimiento que realizamos en la FIP, entre 2017 y 2019, la base de agresiones a excombatientes reporta tres homicidios ocurridos en los municipios de San Vicente del Caguán (2) y Puerto Rico (1). En este caso, preocupa la seguridad de los excombatientes que se encuentran dispersos en el departamento, ya que no cuentan con esquemas de protección.

2. La situación de las víctimas

Las organizaciones y líderes de víctimas se vincularon a los procesos de construcción del PDET en los diferentes pilares y destacan este escenario como una posibilidad de continuar con el trabajo que se venía adelantando desde las mesas de víctimas en la región en el marco de la Ley 1448. Si bien, reconocen los avances que ha posibilitado el Acuerdo de Paz en la región (en términos de seguridad y presencia institucional), actualmente les preocupan los retrasos en los procesos de restitución de tierras e indemnización de víctimas, así como los recursos para la reparación individual y colectiva. En municipios como San Vicente del Caguán se ha conocido de amenazas a líderes, lo que ha afectado la visibilidad de las víctimas y su participación en algunos escenarios.

Desde la percepción de líderes de víctimas, preocupa el desarrollo que vaya a tener la implementación del PATR, la JEP, la Comisión de la Verdad, así como el futuro de la sustitución de cultivos, pues desde su experiencia con la Ley 1448, los retrasos e incumplimientos generan un clima de incertidumbre y desconfianza que afecta los procesos organizativos y el compromiso de las comunidades que han sido víctimas del conflicto.

3. Posiciones de los actores claves en el territorio

Los distintos actores en el territorio ven en el Acuerdo una importante oportunidad para la transformación del territorio y la reducción de los índices de violencia; sin embargo, actualmente las instituciones, comunidades y organizaciones humanitarias destacan la fragilidad del proceso de implementación por la falta de recursos, los retrasos e incumplimientos y la presencia de estructuras disidentes en diferentes zonas del territorio.

Si bien, líderes sociales y organizaciones humanitarias reconocen el impacto positivo del Acuerdo en la situación de seguridad, también prenden las alarmas por las afectaciones que se están presentando hacia las comunidades, como el reclutamiento forzado de menores, y el posible fortalecimiento de las estructuras disidentes pese al intenso trabajo que ha adelantado la Fuerza Pública en el departamento. Finalmente, los excombatientes han manifestado escepticismo y desconfianza en cuanto a la voluntad del Estado de cumplir con lo pactado, pero siguen expresando su compromiso frente al proceso de reincorporación.

4. Principales dinámicas de la confrontación armada

En el departamento del Caquetá, actualmente, tienen influencia por lo menos tres estructuras disidentes: una se encuentra en San Vicente del Caguán, zona limítrofe con La Macarena (Meta), otra tiene influencia entre Cartagena del Chairá, Montañita y Solano, y otra en la zona de influencia del río Caquetá que colinda con el departamento del Putumayo. Estas estructuras, tienen comunicación y operan coordinadamente respetando las tareas y territorios.

La Fuerza Pública ha afectado considerablemente a estas estructuras mediante constantes operativos que han logrado afectar a los comandantes de estas organizaciones. No obstante, estas acciones no han tenido el impacto esperado, ya que más que el debilitamiento progresivo de las estructuras se ha generado un cambio constante en el funcionamiento y sus relaciones con las comunidades. Los relevos en los comandantes generan cambios en las dinámicas de la extorsión, el reclutamiento forzado y la imposición de manuales y normas de conducta en los territorios de influencia.

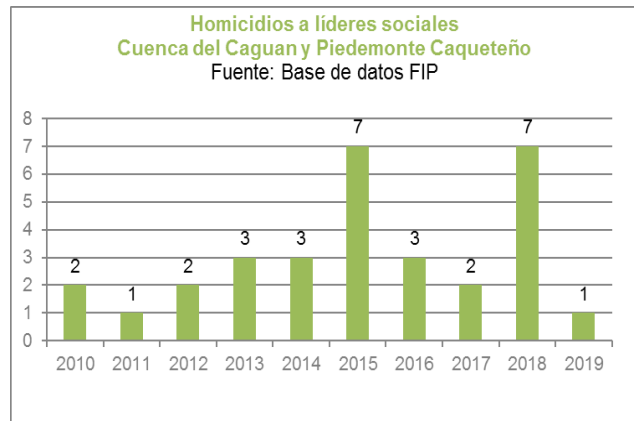
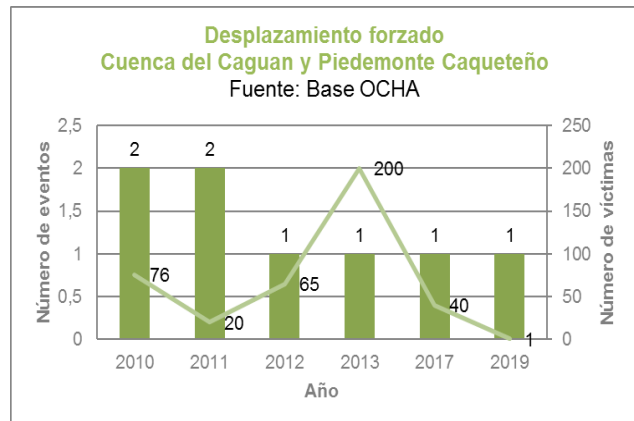
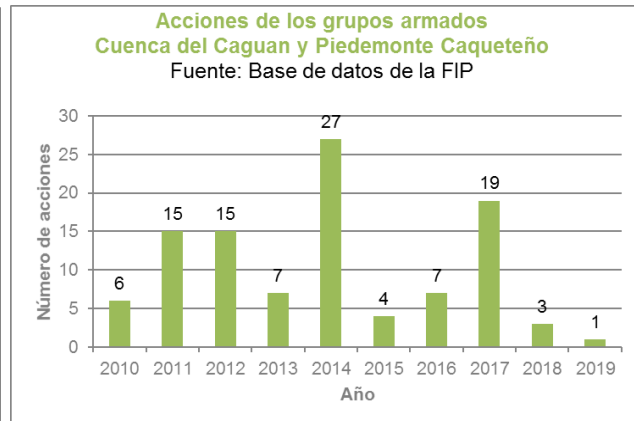
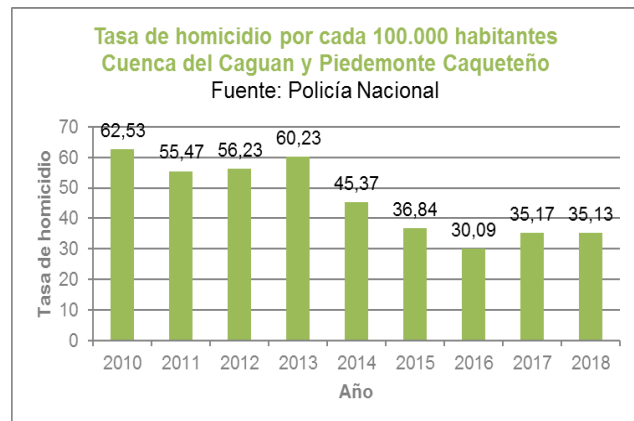
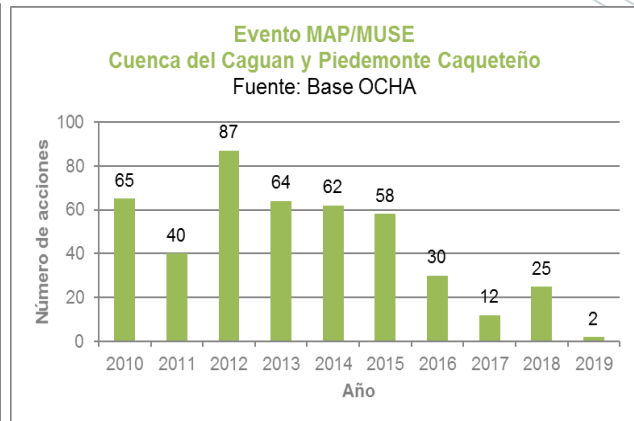
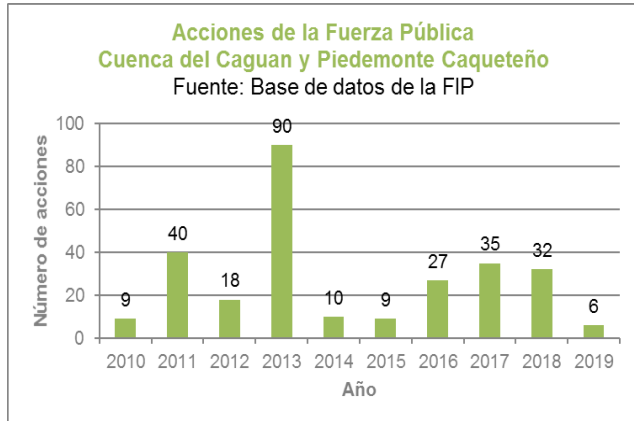
5. Preocupaciones sobre la implementación

- a) Preocupa el fortalecimiento de estructuras disidentes que está generando el deterioro de las condiciones de seguridad.
- b) Si bien se reconoce y resalta el proceso PDET en la región, hay incertidumbre sobre la financiación de las PIC que quedaron comprometidas y en general los recursos para la implementación del PATR. Así mismo, las comunidades perciben como prioritario articular los planes de gobierno de las autoridades locales con el PATR. En este mismo sentido, preocupa que después de la firma del PATR, la ART ha tenido menos contacto con las comunidades por lo que es necesario volver a los territorios para socializar la hoja de ruta a seguir y sostener compromisos y expectativas.
- c) Persisten rezagos en los procesos de formalización de tierras lo cual tiene unas consecuencias particulares en el departamento pues esto limita la sostenibilidad de iniciativas productivas. A esto se suma que la apropiación de baldíos ha sido una de las estrategias para la deforestación.
- d) El aumento de la deforestación tras la salida de las FARC como actor armado y las capacidades locales para la gobernanza ambiental. San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá son los municipios más afectados, concentraron el 22% de la deforestación total del país en 2017. Los fines de la deforestación han sido la instalación de ganadería extensiva y cultivos ilícitos. Los principales responsables son colonos (personas provenientes de otras regiones del país) y disidencias de las FARC. El gobierno nacional en conjunto

con universidades, autoridades locales y Corpoamazonía han adelantado iniciativas para la prevención de la deforestación y el impulso a proyectos de desarrollo sostenible.

- e) Retos de ordenamiento territorial considerando que el 72% del territorio se encuentra bajo la figura de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959, que se superpone con áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques Naturales, territorios de resguardo indígena, zona de reserva campesina y Distrito de Conservación de Suelos y Agua. Además, persisten conflictos en el uso del suelo por actividades de ganadería extensiva y cultivos ilícitos. Estas características han planteado diferentes retos para la implementación de proyectos en el marco de la sustitución de cultivos ilícitos y la formalización de tierras.
- f) La falta de articulación entre procesos de la ART, PNIS, ANT y entidades ambientales como Parques Nacionales Naturales
- g) Conflictividades sociales alrededor de la extracción de hidrocarburos y las necesidades estructurales del territorio. Esto se ha manifestado en escenarios de protesta social a propósito de la implementación del PNIS. Sin embargo, los actores territoriales coinciden en afirmar que los puntos de discusión van más allá del programa e involucran a entidades de nivel regional y nacional para dar respuesta a demandas históricas del departamento como la formalización de tierras, condiciones de seguridad y oferta integral del Estado.
- h) La principal preocupación para la población en reincorporación es al proceso de formalización y consecución de tierras para implementar los proyectos productivos y la incertidumbre sobre la terminación de los ETCR y la renta básica. También, en el caso de Miravalle, ven con preocupación el poco apoyo y la falta de voluntad del alcalde de San Vicente del Caguán para apoyar el proceso de reincorporación.

6. La implementación en cifras²



² Estas cifras corresponden a la región contemplada en el PDET, los municipios de: Florencia, Albania, Belén de Los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso y Algeciras (Hulia).